

Ponza, Pablo. *Intelectuales y violencia política, 1955-1973.* Córdoba (Argentina), Babel editorial, 2010, 259 pp.

Rodolfo Walsh escribía en 1969 que una *oligarquía temperamentamente inclinada al asesinato*¹ era el factor último que explicaba la instalación de la violencia en la vida política argentina desde el golpe militar de 1955 (con la represión posterior en la *Operación Masacre* como gran referente, que el mismo Walsh denunciaría). Dicha “instalación” se hizo más intensa desde 1966 con la dictadura de Onganía y sus sucesores, Levingston y Lanusse. 1973 abría una pequeña puerta a la esperanza, que pronto sería cerrada con Isabelita y López Rega, y los asesinatos perpetrados por la Triple A. La violencia se instalaba de forma plena, en el centro de la política: una violencia conservadora, practicada por los militares y sus cómplices, y frente a la cual la “revolución”, de la mano de la lucha armada, devino el gran antídoto y única salida.

El diagnóstico de Walsh afecta directamente al espacio que Pablo Ponza analiza en el libro que nos ocupa y que no es otro que el análisis de las diversas dimensiones políticas y culturales que llevarán a la práctica de dicha violencia; los caminos culturales y políticos que alimentarán la lucha armada, y que explica a partir de la confluencia de tres factores: las condiciones nacionales, las internacionales y las ideológico-intelectuales. Unos caminos que forjan un rico debate, y se acompañan de una amplia circulación de ideas, pero cuya presencia e entidad se va adelgazando desde 1966, hasta el punto que desaparecen engullidos por la dinámica acción/ represión, y la propia militarización de la “revolución” y de la lucha armada. Semejante tendencia se acentúa desde que las protestas a la violencia oficial llevan, en 1969, al *Cordobazo*, tras el cual, y en un contexto marcado por la división dentro de las FF.AA y el cierre de todos los canales de mediación política, se precipita hacia la lucha revolucionaria directa por el poder: ello queda perfectamente ejemplificado con el asesinato de Vador (30.06.1969) y, en especial, por el secuestro de Aramburu (29.07.1970) y su asesinato, una acción que consiguió la simpatía de buena parte de la opinión pública y que supuso la carta de presentación pública de Montoneros, una izquierda que se irá inclinando por la lógica de la acción militar en detrimento de las ideas y de la política.

De acuerdo con esta dinámica, Ponza afirma que “El asesinato de Aramburu en tanto modelo de acción o forma de resistencia a la dictadura no era ni política ni militarmente diferente a la del enemigo que se pretendía enfrentar. Al contrario tomaba como propia una lógica de violencia vengativa que mostraba un desprecio similar por la vida de sus semejantes, una especie de “ojo por ojo, diente con diente” (p. 218). Es decir que para desarrollar su acción, Montoneros recurrió a categorías conceptuales equivalentes a las de su enemigo, lo que les llevó a medir su fuerza material con él: y por eso fue derrotado. Se

1. Eduardo Jozami. *Rodolfo Walsh. La palabra y la acción.* Buenos Aires: Ed. Norma, 2006, p. 308.

entraba en en una lógica “*vengativa*” que irá impregnando la conducción monotonera -en un proceso extensible a las otras opciones implicadas en la lucha armada- y que acentuará su subjetivismo analítico de la realidad: de alguna forma, coincide con Walsh en la crítica a dicho subjetivismo, incapaz de valorar la fuerza del peronismo tradicional y, sobre todo, la del Ejército. Y que llevaría incluso, a valorar el golpe de estado de 1976 de forma positiva porque era la manifestación incontestable de la debilidad de dicha oligarquía, que se veía obligada a recurrir a la intervención directa de las FF.AA para sobrevivir. Semejante “debilidad” facilitaba el enfrentamiento directo del “movimiento popular” con el Ejército y acercaba al triunfo de la revolución. Este mismo subjetivismo, que tomaba como referente la revolución cubana -igual que otros movimientos guerrilleros en el Cono Sur-, no entendía que el desarrollo económico y político propuesto por esta oligarquía comportaba el aniquilamiento de los movimientos sociales emergentes en los sesenta, y que semejante tarea quedaba facilitada por la lucha armada.

Ahora bien, no era éste un análisis extravagante, ni raro. En absoluto. Tenía una impecable lógica interna que también alimentaba opciones de lucha armada a muchos kms. de distancia. Sin ir más lejos, la ETA de los 60’/70’ desarrollaba unos parámetros relativamente semejantes para enfrentarse a la dictadura de Franco. En un contexto de intenso debate político planteaba la lucha armada en términos parecidos a la “*venganza*” militarizada de Montoneros, y lo materializaba con el asesinato del policía torturador, jefe de la Brigada Político Social, Melitón Manzanos en 1968. Con esta acción, ETA castigaba a un criminal, a la vez que tributaba homenaje a uno de sus militantes, muerto en un enfrentamiento con la policía; y además, aspiraba a estimular la concienciación y el apoyo del pueblo vasco. Años después, Mario Onaindía, uno de los militantes de ETA juzgado en el proceso de Burgos de 1970 acusado de participar en dicho asesinato, explicaría con lucidez en sus memorias, el sentido real de dicha acción: con ella, dice Onaindía, no era el supuesto “movimiento popular” quien se enfrentaba al Estado sino “*nosotros*” (es decir, ETA), quien se encaraba con la policía en un combate desigual, con lo cual la derrota era segura. Es más, deja constancia de la conciencia de los militantes implicados en dicho atentado que, una vez realizada “*la ejecución*”, ellos se preparaban para “*la muerte*” es decir, para su destrozo cuando fuesen detenidos por la policía si no eran acribillados antes: en este sentido, la “muerte” de Manzanos suponía su propia muerte².

Sólo el contexto de los sesenta-setenta -en terminología de Ponza- permite entender semejante fiasco y sólo a través de los necesarios cambios de estrategia política se conseguirán recompensas y “victorias” en diferido, como por ejemplo el acceso de José Alberto Mujica, ex-tupamaro a la presidencia de la República de Uruguay. El cambio ha sustituido a la revolución, la movilización

2. Mario Onaindía. *El precio de la libertad (Memorias 1948-1977)*. Madrid: Espasa Calpe, 2001.

a la lucha armada. Pero no sería justo desdeñar el rico patrimonio cultural y político que acompañó a la revolución, y a la esperanza en la transformación de la sociedad: el libro que nos ocupa da cumplida cuenta de tal acervo. Y lo hace a partir de una actitud crítica absolutamente necesaria para avanzar en una perspectiva de izquierdas, colaborando a la superación de otro tipo de secuelas negativas que ha legado la lucha revolucionaria: la intransigencia y la incapacidad crítica, la canonización de los comportamientos y la mitificación de la propia lucha.

Una secuela que se ha visto reforzada con la emergencia de la “víctima” como referente conceptual y sentimental de la lucha de las Asociaciones por los Derechos Humanos, de la “víctima” como elemento central de la lucha política y jurídica que reposa en la denuncia de los crímenes de lesa humanidad y en la jerarquía del desaparecido, como agente de reparación. Esta perspectiva ha actuado de estímulo y, al mismo tiempo de condicionante de la producción bibliográfica puesto que, si bien por una parte la ha estimulado, por otra, tal crecimiento ha obviado -en general- toda actitud crítica ante el combate desarrollado por dicha “víctima”: Ponza apunta, como razón de dicho fenómeno, que la lucha contra la impunidad de los verdugos ha casado mal con cualquier posible crítica a la “víctima” ya que ello significaría un *...modo de “hacerle el juego a la derecha”...* lo cual no deja de ser una falacia. Como si el horizonte fijado fuese el de la equiparación entre víctimas de la izquierda y de la derecha, por su simple condición de asesinados, renunciado a explicar procesos y analizar dinámicas, funciones básicas del historiador. De esta forma, a través de la abstracción moral, se consolida una de las perspectivas más perversas que mediatizan la actualidad. Un discurso, por desgracia, bien asentado en España que pretende igualar los asesinatos y la brutalidades cometidas por los rebeldes y la fuerzas policiales franquistas con los realizados por los republicanos, la guerrilla antifascista o cualquier otra forma de respuesta a la violencia de la dictadura: todos son “víctimas”.

Ello es reconocible incluso, en la fijación de reglas no escritas pero interiorizadas culturalmente, como la obligación de realizar una plena condena a los actos violentos de cualquiera de los “bandos” en el momento de explicar, comentar u opinar sobre hechos y dinámicas de esta índole: como si se tratase del peaje de una autopista, hablar de la violencia requiere de una posición previa y explícita de condena de todo tipo de violencia para no suscitar sospechas sobre la corrección política de quien habla. El conocimiento no puede estar sometido a ningún peaje. Es imprescindible que, desde el rigor y la objetividad, la historia sea capaz de explicar todos los fenómenos de nuestro pasado: no es ocioso recordar, una vez más, que la verdad nos hace libres. Y la aportación de Pablo Ponza al respecto es ejemplar.

Manel Risques
Universitat de Barcelona